



45.000 DESPIDOS Y REBAJAS SALARIALES

PAREMOS LA SANGRIA

LOS SINDICATOS DEBEN ACTUAR



Desde el inicio de la cuarentena se han registrado 45.000 despidos entre los trabajadores registrados. De los precarizados e informales, claro, no hay registros.

Pero se anotaron 12 millones de personas sin sustento para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. De las cuales solo a 8 millones les pagarán 10.000 pesos, recién a partir del 21 de abril, a un mes de la cuarentena. Y en tandas, hasta mayo.

Un número creciente de empresas del país aplican descuentos a sus trabajadores de hasta el 50% de sus salarios. Entre ellas, grandes multinacionales y las líderes de la Unión Industrial Argentina. Tantas otras retienen salarios o los pagan en cuotas.

Techint, McDonald's, Aluar o las automotrices no se están fundiendo por el golpe económico de la cuarentena. Aprovechan la situación para golpear a los trabajadores e imponer nuevas

relaciones de fuerza.

El dólar pasó los 100 pesos y no encuentra techo. Que no se actualicen los salarios según la inflación ya significa una pérdida salarial importante.

Cuentan con el concurso de la burocracia sindical y el gobierno. Los gremios de la CGT hacen cola para acordar las rebajas salariales, las suspensiones e incluso los despidos. Donde no hay sindicato, se aplican directamente.

Contrasta con esto la acción de la dirección clasista del Sutna, el gremio del Neumático que actuó desde el primer día para garantizar la cuarentena con el salario integral y ahora condiciona cualquier puesta en marcha a un protocolo bajo control obrero, de dotaciones exclusivamente necesarias, adecuadas a la esencialidad, y ha vuelto a rechazar las rebajas salariales.

Sin respaldo de la CGT se libran duras luchas, como la del Frigorífico Penta, contra el cierre

fraudulento y antisindical del patrón kirchnerista de "carne para todos". Los obreros siguen en pie de lucha luego de enfrentar la represión de Berni y Kicillof. El conflicto en Dánica venció un lock-out trucho. Un paro de la línea de colectivos 540 logró que paguen los sueldos adeudados. Una convocatoria de movilización de los plásticos de Mascardi logró lo mismo.

Con los métodos de lucha de la clase obrera podemos frenar este desangre. Asambleas en cada lugar de trabajo, con los recaudos necesarios, para fijar un pliego de reclamos. El cuidado de la salud no puede ser la excusa para que unos pocos decidan por todos. No tienen mandato para entregar el trabajo, el salario y la salud de los trabajadores.

Tomemos en las manos de todos los trabajadores a nuestras organizaciones. Pongamos en marcha a los sindicatos y hagamos sentir la fuerza de la clase trabajadora.

Durante la jornada del martes 14, el dólar contado con liquidación cotizó a 114 pesos y el dólar Bolsa se negociaba a 107. De esta manera, a pesar del cepo cambiario y de la cuarentena obligatoria en todo el país (con sus consecuentes restricciones la actividad bancaria), la brecha cambiaria con la cotización oficial se ubicó por encima del 60%, lo que no es otra cosa que una expresión de la presión devaluatoria de “los mercados”.

Lo que ocurre es que la emisión monetaria no fue efectuada por el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia, sino para pagar gran parte de los vencimientos de la deuda en pesos y de las Leliqs. Esos pesos en manos de los bancos y de especuladores se pasan en línea recta al dólar, por la caída de las tasas de interés locales, cuando el país está al borde del default. La consultora Ecolatina afirma que la corrida hacia el contado con liqui es porque el mercado se anticipa a una emisión de 500 millones de pesos para pagar deuda con privados en el año (25% de la base monetaria), por el compromiso de Alberto Fernández de cumplir los compromisos en pesos (*Clarín*, 14/4). Esos mismos bancos se niegan a aumentar sus depósitos a plazo fijo porque no quieren prestar dinero a tasas que no sean usurarias, más en un cuadro de alto riesgo de incobrabilidad.

Es decir que el gobierno está financiando la fuga de capitales. Nuevamente, Alberto Fernández hace lo contrario a aquella promesa de que “entre los bancos y los jubilados, elegía a los jubilados”. Más aún, es con la plata de la Anses que se lubrica el rescate de la deuda en pesos, mientras congelan la movilidad a

En una nota elevada a Alberto Fernández, la cúpula de Juntos por el Cambio insta al gobierno a “iniciar conversaciones con los gobiernos de los países que integran el Club de París con el propósito de obtener una prórroga de las deudas con las instituciones oficiales acreedoras de esas naciones”.

Este reclamo no es inocente. El vencimiento con el Club de París es una cuota del próximo mayo, de 2.000 millones de dólares, pactada por Kicillof cuando era ministro de Economía. Recordemos, una deuda que vino creciendo desde la dictadura. El único propósito del macrismo, que juntó a todas sus cabezas para esta petición, es poder acusar después al gobierno de que no negoció a tiempo para postergar el pago. Pero son partidarios del reconocimiento integral de esta deuda ilegítima, si las hay, de la época de Martínez de Hoz.

La factibilidad de esta postergación no es para nada sencilla. Las naciones que integran el Club de París están en aprietos gigan-



El dólar arriba de los 100 pesos

millones de jubilados, para que la patria financiera siga haciendo sus negocios.

Esta fuga de capitales es un denominador común en todos los países emergentes. Estos países registraron en marzo un récord histórico en la salida de capitales, que ascendió a 83.000 millones de dólares. Según los pronósticos del Institute of International Finance (que representa a la gran banca internacional) “para muchos emergentes, las entradas más débiles significarán que no podrán ejecutar grandes déficits de cuenta corriente y por ello desarrollarán rápidos ajustes”, todo lo cual preanunciaría un “segundo round” con mayores huidas de capital, que serían más acentuadas en América Latina que en el resto de los conti-

nentes (*Ambito Financiero*, 10/4). Esto desvaloriza las monedas nacionales y desata una carrera de devaluaciones competitivas que profundizan las tendencias a la guerra comercial y monetaria.

Estos problemas afectan de lleno a la Argentina, cuando la recaudación de divisas tiende a caer en picada no solo por el desplome de los precios internacionales de las materias primas sino también porque la contracción del mercado mundial podría afectar con una reducción de hasta el 32% en el volumen de intercambio de mercancías con el extranjero (*El Cronista*, 13/4). Un agravante es que la liquidación de divisas por exportación también es baja, porque ya fue adelantada la mayor parte de la venta de la cose-

cha de soja, y la patronal agraria acopia para presionar una devaluación del dólar oficial.

El empantanamiento de la reestructuración de la deuda externa sigue siendo para el gobierno el problema troncal, porque le impide recurrir a un financiamiento internacional. Si bien reperfiló los vencimientos de la deuda en dólares bajo jurisdicción local, lo hizo para prepararse para una negociación de la deuda bajo ley extranjera, que podría extenderse por el resto del año, tiempo en el cual se propone pagar los vencimientos que totalizan unos 3.400 millones de dólares. A esta carga se suman otros compromisos con el Club de París por 2.100 millones y con otros organismos multilaterales por 3.100 millones. Si a ello suma-

mos los 1.650 millones de vencimientos de las provincias (que deberían comprar dólares a la Nación), tenemos comprometidas en el curso del año el 90% de las reservas internacionales netas del Banco Central -que suman unos 10.350 millones de dólares.

En estas condiciones, la subordinación del gobierno nacional al capital financiero puede derivar en un quebranto generalizado. No hay que descartar, en este escenario, que termine pidiendo un nuevo rescate al FMI u otros organismos internacionales (como aconsejó recientemente la oposición), pero ello reforzaría los condicionamientos para que ejecute un ajuste mayor. Esto, cuando la situación social es una olla a presión.

Todo este escenario agrava las presiones de los principales complejos exportadores por una devaluación en regla, que empareje la cotización oficial con los tipos de cambio financieros. Una mayor depreciación del peso agrava la inflación y, por ende, la confiscación en los ingresos que están sufriendo millones de trabajadores con reducciones salariales, despidos y suspensiones. Estas contradicciones pueden estallar, más temprano que tarde, y despertar un cuadro de choques sociales profundos.

Los trabajadores deben intervenir para evitar que el peso de la crisis se descargue sobre sus espaldas para rescatar a la patria financiera. Más que nunca, la única salida pasa por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y por la investigación y el no pago de la deuda usuraria y fraudulenta.

Iván Hirsch

Juntos por el Cambio, por más deuda con el FMI

tescos, entre ellas Francia, España y otras. Por lo que sería muy difícil reunir una posición unánime, cuando en Europa se sacan los ojos por el financiamiento de los paquetes nacionales por medio de eurobonos, de tipo comunitarios, que Alemania, Holanda y otros no quieren habilitar. Esta negativa ha llevado los endeudamientos nacionales de los países más afectados a porcentajes astronómicos de sus PBI.

Por parte del gobierno de Alberto Fernández hay silencio de radio en este punto. Sólo hemos conocido el reperfilamiento compulsivo de la deuda en dólares con jurisdicción local, pero sin quita alguna, hasta el año que viene. El movimiento no impidió que el riesgo país siga flotando en los 4000 puntos. Para las exiguas reservas del Banco Central, que ya se gastó los 4.500 millones de dó-

lares habilitados por la mega ley de emergencias, el pago al Club de París se trata de un saqueo que acerca al Central a la insolvencia.

Más adelante, en la misma misiva al Presidente, JxC dice “nuestro país debe ser parte activa y socio leal en las tratativas que se desarrollarán con vistas a la ampliación de las facilidades de emergencia, al aumento y redistribución de los DEGs (Derechos Especiales de Giro) del FMI y a permitir que el Fondo amplíe y multiplique los swaps de monedas, en línea con los que han puesto en marcha banco centrales de los países desarrollados”.

Esto completa el cuadro. Abogan para que demos otro salto gigantesco en el endeudamiento, mediante desembolsos de facilidades extendidas o por medio del crédito en Derechos de Giro, la moneda del FMI. Efectivamente,

trascendió hace pocos días una negociación secreta (sitio Maxi Montenegro) por unos 3.000 mil millones de dólares con el FMI.

Pero, claro, serían para no caer en default y garantizar los pagos de deuda hasta fin de año, mientras se produce la postergación de la reestructuración. O, en su defecto, para seguir pagando la deuda (entre ellos al Club de París y al FMI), aún cuando se llegara a un acuerdo o aún cuando se entrara en un segundo default selectivo, también con la deuda en dólares bajo jurisdicción extranjera. Lo que de cualquier modo dejaría a Argentina fuera definitivamente del mercado de deuda para la nación, las provincias y las corporaciones.

En ese caso, habríamos llegado al default después de haber pagado más de 200 mil millones de pesos (y una cifra muy superior ha sido refinanciada a tasas siderales) y 4.000

millones de dólares desde que asumió el gobierno y ya en medio de la pandemia con la economía semiparalizada y los trabajadores pasando miserias y con un sistema sanitario que está muy lejos de estar preparado para la ola de contagios.

El no pago de la deuda impulsado por el Partido Obrero y el FIT abarca a toda la deuda, con todos los bonistas, con el Club de París y con los organismos multilaterales, en pesos y en dólares, de jurisdicción local y extranjera. Con la sola excepción de los bonos en manos de la Anses. Esta cuestión, junto al impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas se va transformando en una cuestión de vida o muerte. Juntos por el Cambio acompaña desde la derecha la política de entrega al FMI y es socio en la bancarrota nacional, por eso aboga con el lobby patronal por la salida cuanto antes de la cuarentena: para salvar el edificio capitalista y sus especuladores y banqueros, aún a costa de la salud del pueblo argentino.

Néstor Pitrola



Se disparó la curva de los despidos y las suspensiones

GABRIEL SOLANO

En su último discurso, Alberto Fernández se jactó de que el crecimiento de la curva de los contagios de coronavirus estaba por detrás de lo esperado. No faltaron especialistas que cuestionaron esos índices, señalando que en ausencia de testeos masivos es imposible determinar con exactitud una curva de contagios. La reducción en la curva la impuso la cuarentena, pero el tiempo ganado no ha servido para equipar adecuadamente el sistema de salud. La lucha contra la pandemia recién comienza y la Argentina continúa desguarnecida.

Los números que no ofrecen controversias son los que trazan un cuadro de la situación laboral en el país. Según el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, los despidos que se ejecutaron en el país desde que se decretó la cuarentena ascienden a 45.000. Se trata de un número muy importante, pero de todos modos parcial. Debe tenerse en cuenta que los trabajadores no registrados son los primeros afectados por los despidos, por el simple motivo que la desvinculación es gratuita. Otro tanto ocurre con los trabajadores de la construcción, cuyos despidos aparecen encubiertos por la forma transitoria de sus tareas. A esto hay que agregarle que millones de trabajadores que figuran como monotributistas están imposibilitados de realizar su trabajo, perdiendo el sustento diario. Para ellos, los 10.000 pesos, distribuidos por la Anses bajo el rótulo de Ingreso Familiar de Emergencia, representan una pequeña parte de sus ingresos habituales que, por otra parte, no empezaron a cobrarse cuando van 25 días de cuarentena total.

Aún todavía más que los despidos, crecen las empresas que aplican reducciones salariales a sus trabajadores. Muchas veces estas reducciones superan incluso el 50% del salario. A la cabeza de esta práctica están las principales empresas instaladas en el país, varias de ellas de alcance internacional. Las rebajas salariales se imponen bajo el método del chantaje: o se acepta la reducción o se pasa directamente al despido. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la aceptación de las rebajas salariales, lejos de asegurar los puestos de trabajo, suelen ser la antesala de los despidos. El papel de las direcciones sindicales ha sido, en este cuadro, especialmente nefasto. La UOM negocia reducciones salariales en las principales empresas, como Aluar y Acindar. El Smata lo ha hecho con todas las automotrices, con el agravante de que en algunos casos los acuerdos fueron previos a la cuarentena. Barrionuevo se ha pronunciado directamente por una rebaja generalizada. La casi totalidad de la burocracia sindical se encuentra jugada en estos pactos con las patronales.

El crecimiento de los despidos y de las suspensiones con rebaja salarial ha convertido al decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández en papel mojado. Luego de sus entredichos públicos con Techint, el Presi-



Techint impuso 1400 despidos, homologados por el Ministerio de Trabajo

dente se ha llamado a silencio ante este desatado alevoso de los capitalistas. En el discurso del fin de semana prefirió perder el tiempo sobre la pertinencia o no de habilitar el ejercicio físico en el espacio público, sin hacer referencia alguna a la ofensiva que están sufriendo los trabajadores. En un reportaje posterior, el Presidente señaló que el conflicto con Techint estaba superado. No aclaró, claro, que el grupo que comanda Paolo Rocca se salió con la suya. No solo impuso los 1.400 despidos; logró además que el Ministerio de Trabajo los homologue.

Dólar a 110 pesos

Junto con la que mide los despidos y las suspensiones, se ha disparado también la curva que refleja las cotizaciones del dólar. El salto por encima de los 100 pesos de los tipos de cambio que se obtienen en el mercado de acciones y de bonos agravan todas las contradicciones de un proceso económico en ruinas. Por estos mecanismos, los capitalistas logran sortear los controles de cambio establecidos por el gobierno y acelerar la fuga de capitales. A la vez, al incrementar la brecha con la cotización oficial, que ya se ubica en el orden del 60%, opera como una fuerte presión devaluatoria, agravada por la depreciación de las monedas de los países de la región, en primer lugar el real brasileño. Con seguridad, esa presión devaluatoria llevará a una retención de la cosecha por parte del capital agrario, para imponer una devaluación que mejore la cotización de sus ventas en moneda local.

El proceso de fondo que alimenta el salto del dólar es la emisión monetaria que el gobierno viene incrementando para pagar los vencimientos de la deuda pública en pesos y asistir a los capitalistas. Muchos analistas coinciden en que el salto actual del dólar fue generado por la noticia de que el gobierno se apresta a emitir 500.000 millones de pesos para pagar esos vencimientos. A esto hay que agregarle que el Banco Central ha llevado adelante una reducción del stock de leli-

para que los bancos usen esos fondos para asistir a las empresas que no pueden pagar los salarios. Esta reducción implicó inyectar 400.000 millones de pesos a los bancos. Sin embargo, las empresas denuncian que esa asistencia se aplica a cuentagotas. El plan del gobierno para que los bancos otorguen créditos al 24% es un fracaso. La razón de ello se debe a que impera el temor a que una quiebra generalizada convierta esos préstamos en incobrables. Los bancos, entonces, usan esos fondos para operar en los mercados haciéndose de dólares y tirando para arriba la cotización. Este proceso parasitario bien puede concluir en una hiperinflación, que termine de licuar finalmente esa emisión realizada. Pero los capitalistas estarían cubiertos en dólares, mientras los trabajadores sufrirían un golpe demoledor sobre sus condiciones de vida.

Como el Estado se encuentra sin financiamiento, a excepción de esta emisión monetaria explosiva, han surgido del lado del oficialismo propuestas para aplicar impuestos especiales a los capitalistas de carácter extraordinario. Los borradores que se han dado a conocer hasta el momento se caracterizan por su conservadurismo. La propuesta original de afectar los fondos blanqueados bajo el macrismo (aproximadamente unos 110.000 millones de dólares) han sido reemplazados por un impuesto del 1% a los patrimonios superiores a los 3 millones de dólares -unos 200.000 millones de pesos a la cotización actual. Se dejaría de lado también afectar a las empresas, con la excusa de que no se quiere perjudicar al empleo, permitiendo que los capitalistas oculten su propio patrimonio detrás del capital de las sociedades. No es casual que la previsión que tengan de recaudación sea más que módica: unos 3.500 millones de dólares, esto siempre y cuando los capitalistas se dignen a pagar el tributo. Se trata de una cifra que está muy lejos de cubrir siquiera los vencimientos de deuda que no han sido refinanciados hasta fin de año que, su-

mados los que tiene la Nación con privados, organismos multilaterales de crédito y las provincias, rondan los 10.000 millones de dólares. Como la variante más probable es que la propuesta de reestructuración de deuda que presente el gobierno sea rechazada, se abre la alternativa de continuar la negociación mientras se continúan con esos pagos. Así, el impuesto a los ricos alcanzaría solo para pagar una parte menor de la deuda. Dicho de otro modo, el impuesto iría a sostener el edificio de la especulación capitalista y el rescate de la deuda, de ningún modo a financiar las necesidades de las masas ante la pandemia.

Los sindicatos deben actuar

A esta altura no caben dudas que la cuarentena está siendo aprovechada por los capitalistas para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Bastaron un par de semanas sin actividad para que empresas de porte internacional decidan despedir, rebajar salarios e imponer de hecho reformas laborales, que buscarán preservar una vez levantada la cuarentena. Para los trabajadores se impone la necesidad de rechazar la presión capitalista de levantar la restricción a la actividad, pues no existen condiciones sanitarias adecuadas para ello. La propia OMS (Organización Mundial de la Salud) acaba de sacar un documento alertando sobre los enormes peligros que representa levantar prematuramente la cuarentena. El rechazo a esa presión incluye denunciar los despidos y las suspensiones, y defender los puestos de trabajo, la integralidad del salario, la implementación de un seguro al desocupado de 30.000 pesos que cubra a trabajadores precarizados y monotributistas, y un incremento real de la asistencia de comida en las barriadas y colegios. Este programa plantea un reclamo a los sindicatos, que deben romper su sumisión a las patronales y tomar medidas de acción en defensa de los trabajadores. Plantea la ruptura de las centrales sindicales con el gobierno. Lo mismo vale para todas las organizaciones de los desocupados. La acción de la clase obrera no debe limitarse a un reclamo al Estado para que ejerza una protección, más cuando ese Estado se demuestra cómplice de las patronales. La compatibilidad entre las restricciones que plantea la cuarentena y la necesidad de una acción de lucha deberán ser debatidas y resueltas democráticamente por los trabajadores en asambleas. Incluimos la ocupación de toda fábrica que cierre, para exigir que el Estado garantice su continuidad bajo control de los trabajadores.

El salto de todas las curvas -la de los despidos, las suspensiones, la del dólar- plantea un programa de salida de conjunto: no al pago de la deuda, nacionalización de la banca y el comercio exterior, control de cambios, impuesto progresivo a los grandes capitalistas, centralización del sistema de salud bajo la dirección de los trabajadores, no a los despidos y las suspensiones, defensa del salario.

Paro nacional de la carne contra los despidos y la represión en Penta

Si bien el paro nacional de la carne del lunes 13, convocado tras la represión en el frigorífico Penta, fue una acción gremial limitada a algunos frigoríficos y sin continuidad, ha sido la expresión de las tendencias a la lucha de los trabajadores frente a despidos, cierres y ataques al salario.

En muchos lugares, sin embargo, como Campo del Tesoro de Pilar o en la zona oeste, se trabajó normalmente, ya sea porque los delegados de Fesitcara (Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne, el sindicato convocante) no hicieron efectiva la medida o bien por el boicot de parte de la otra federación, dirigida por “Beto” Fantini (ver “Paro fantasma del sindicato de la carne en zona oeste” y “Pilar: Campo del Tesoro reduce los sueldos de los trabajadores”, en Prensaobrera.com).

Los trabajadores de Penta vienen denunciando un lock-out patronal desde el 18 de marzo y reclaman el pago de tres quinientas de salarios atrasados y la reincorporación de los despedidos. En este contexto, se instaló un acampe en las puertas de la planta, en Quilmes, que fue reprimido por la policía la semana pasada.

La intransigencia de la patronal, luego de la medida de fuerza nacional, plantea su continuidad con un plan de lucha de todo el gremio; tanto es así que lejos de llegar a una solución favorable para los trabajadores de Penta, que reclaman el pago de salarios adeudados, la reapertura de la planta y el reconocimiento sindical de los delegados y la libertad de organización, el empresario Ricardo Bruzzese continúa con el lock-out y profundiza una línea de ataque a los trabajadores, lan-

zando un pedido de desafuero a los delegados.

El 13 de abril se llevó adelante una reunión entre el sindicato y la patronal en el Ministerio de Trabajo donde los funcionarios se habrían “pronunciado” en favor del reclamo de los trabajadores, según afirmaron los representantes gremiales, pero sin tomar medida concreta alguna que dé salida al conflicto. Así, el gremio hará un compás de espera hasta la próxima reunión. Las dilaciones y reuniones sin avances concretos a los reclamos de los trabajadores es pasto para que la patronal siga su línea antiobrero.

Ricardo Bruzzese, actual presidente de la cámara de la carne (Cadi) y empresario del riñón del kirchnerismo, se apoya en la inacción del gobierno frente al conjunto de empresarios que despiden y recortan salarios, y que ya significó 45 mil puestos de trabajo destruidos, como reconoce el ministro Claudio Moroni, para continuar con sus ataques a los trabajadores.

En los trabajadores anida una clara conciencia de que el desafuero (mediante telegrama) y despido (de palabra) de compañeros tiene como trasfondo avanzar en una reglamentación brutal dentro de la planta. El nuevo cuerpo de delegados desplazó al anterior que estaba “arreglado” con la patronal. Los trabajadores ven en esta renovación una posibilidad de colocar reivindicaciones básicas y modificar un cuadro de dictadura patronal.

Los trabajadores del Penta están realizando una experiencia veloz con el gobierno de Alberto Fernández. Entre ellos se oyen cada vez más voces que responsabilizan al gobierno municipal de Mayra Mendoza y al ministro de Seguridad, Sergio Berni, por la

represión, y cuestionan la falta de respuesta del Estado frente a sus reclamos. La intendenta de Quilmes demoró semanas en recibirlos y cuando lo hizo, un día antes de la represión, no dio ninguna respuesta.

Por otra parte, continúa la incógnita de quién dio la orden para reprimir; está presente en la base la convicción de que Berni envió a la policía, más allá de que él asegure que no dio orden de reprimir, como dijo un trabajador: “Este viene a hacerse el boludo y a la cana la mando él, se quiere lavar la cara”.

La lucha de Penta abrió una crisis potencial, porque pone sobre la mesa quiénes ponen su esfuerzo para salir de esta crisis económica, y de la misma pandemia, y quiénes aprovechan esto para atacar aún más a los trabajadores. No hubo ningún accionar serio por parte del gobierno para que Bruzzese pague los salarios que debe; en este sentido, la apertura de los libros contables de la empresa es clave para constatar las ganancias o pérdidas que den lugar a este incumplimiento. Mientras tanto, el Estado debe garantizar los ingresos económicos a cada trabajador, para que su reclamo no sea callado por el hambre y sus familias no queden a merced de este ataque patronal.

El accionar del gremio no puede agotarse en un paro, para lograr el triunfo de los reclamos es necesario un plan de lucha del gremio, por el pago de todos los salarios adeudados, la reapertura de la planta con todos adentro y la libertad de organización sindical. Los trabajadores del Penta pueden derrotar este ataque patronal si toman las acciones en sus manos.

Juan Carlos Moya



Sin empleo, salario y seguridad no hay cuarentena

La nueva modalidad -“administrada”- de la cuarentena fue la bandera verde para que las patronales, en tándem con las burocracias sindicales, redoblen su presión por volver a poner en marcha la producción, aún en tareas claramente no esenciales.

Antonio Caló (UOM) expresó esa orientación con claridad: las medidas “no fueron tan flexibles como algunos esperaban”, pero “si hay alguna industria que necesite trabajar lo hablaremos con los ministerios”. Por ese agujero se cuelan, todos los días, nuevas excepciones.

Muchas empresas no esperan el visto bueno de ningún ministerio para convocar a los trabajadores a retomar tareas. Y muchas otras, que son autorizadas a fabricar ciertos productos necesarios, no se limitan solo a eso.

Morvillo, por citar un caso, debía realizar cuadernillos escolares pero exigió a sus trabajadores imprimir la totalidad de sus revistas, bajo el chantaje de cerrar definitivamente la planta si no lo hacían. Un procedimiento que se repitió en la alimenticia Dánica, en el frigorífico Penta y en infinitas más.

Despidos masivos y rebajas de salarios

Pero los despidos no son solo una amenaza. Según un informe oficial, desde el comienzo de la cuarentena se produjeron 45.000 “desvinculaciones” en todo el país. Esto no incluye a estatales o docentes, que se han quedado sin cargo (suplentes, provisionales, programas educativos precarizados); tampoco al amplio universo de informales que no dejan huella en las estadísticas ni a los trabajadores de la construcción.

El DNU que los prohíbe es letra muerta. Las patronales solo reconocen el artículo que les conviene: para pactar las suspensiones con los gremios, con rebajas salariales “que van desde el 30 al 70% del salario”. Esa lista abarca a grandes empresas, como Aluar, Kraft y las terminales automotrices. El burócrata del Smata, Ricardo Pignatelli, declaró que el gremio “está haciendo un esfuerzo para que no se cobre menos de 40 mil pesos”.

Según la CGT, “solo en el conurbano hay más de 600 empresas denunciadas en el Ministerio



Las patronales redoblan la presión para volver a poner en marcha la producción, aun en áreas no esenciales

de Trabajo”. Hugo Melo, secretario general de la UOM de La Matanza, declaró: “No nos está atendiendo nadie”. El Ministerio de Trabajo mira para otro lado; peor aún: “puso en duda el pago de haberes a sus empleados que no tengan los justificativos correspondientes o demuestren las tareas cumplidas desde sus hogares”. O sea que es cómplice por omisión y por acción.

La solicitada cumple la doble función de embellecer al gobierno y autoexculparse. Pactar con las patronales y dejarlas hacer son variantes de una misma estrategia consciente de derrota de la clase obrera.

Una línea patronal que reclama la acción de los sindicatos

La reducción de planteles y la rebaja generalizada de salarios son una vía para consolidar un nuevo piso de explotación en Argentina. Los capitalistas se valen de la emergencia y de las condiciones que impone el aislamiento, que al mismo tiempo vulneran por todos lados.

Frente a este verdadero plan de guerra, los sindicatos deben romper su alineamiento con las patronales y tomar iniciativas de

acción. El ejemplo del Sutna es una guía en la defensa del salario, los puestos de trabajo y la salud.

El conflicto del frigorífico Penta, que obligó a la burocracia de la Carne a convocar a un paro nacional; las luchas en Dánica y en La Serenísima; el paro anunciado por los repartidores de las App para el 22 de abril; los reclamos en los supermercados por el bono y la reducción de la jornada; todas estas son manifestaciones de la disposición obrera.

Nuestro programa es: ningún despido ni rebajas del salario, indexación mensual por costo de vida; seguro universal de 30 mil pesos; ocupación de las empresas que cierren y continuidad a cargo del Estado, bajo control obrero; centralización de todo el sistema sanitario, público, privado y de obras sociales, bajo un comando único para combatir la pandemia; comisiones obreras de seguridad e higiene que controlen la implementación del plan de emergencia en todos los lugares de trabajo del país; no al pago de la deuda, volcando todos los recursos a combatir la pandemia y sus efectos sociales.

Miguel Bravetti - Daniel Sierra



La batalla del Sutna

La lucha de los trabajadores y la política patronal ante el Covid-19

La posición de la dirección del Sindicato del Neumático ha puesto de relieve qué intereses persiguen las patronales en la intención del retorno a la producción en las grandes fábricas del gremio. Luego del anuncio de Alberto Fernández de nuevas medidas de flexibilización de la cuarentena, las patronales de Bridgestone, Pirelli y Fate no han logrado presentar un protocolo de seguridad para las plantas ni el plan productivo que pretenden llevar adelante. El Sutna ha comunicado a todos los trabajadores que se realizó una teleconferencia con las patronales y el Ministerio de Trabajo donde no solo no se presentaron debidamente los protocolos, sino que las empresas -principalmente Fate y Bridgestone- insisten en bajar el salario de los trabajadores que se encuentren realizando la cuarentena obligatoria.

Por su parte, el Sutna, ha rechazado cualquier rebaja salarial a los trabajadores y ha insistido en que la producción de neumáticos se encuentre acorde con las necesidades esenciales de funcionamiento que dictan las medidas elementales de la pandemia. Como señalaron en repetidos comunicados públicos, los trabajadores pueden estar dispuestos a abastecer el transporte de alimentos o a las ambulancias, pero de ninguna manera van a correr riesgos frente a la pandemia en función de la ganancia capitalista. Este es un punto crucial para cualquier comprensión obrera en el marco de la extensión planetaria de un virus que se lleva miles de vidas en todos los países. El propio decreto presidencial señala que la producción de neumáticos debe estar adecuada a estas necesidades esenciales. Evidentemente, estas no son las prioridades de las patronales que, frente a un cese de la producción dictada por una emergencia mundial, bus-

can atacar la fuente de subsistencia de los trabajadores. Por otro lado, el Sutna ha presentado la exigencia de que se controlen los stock de cubiertas que se encuentran en los locales comerciales, talleres y en las propias plantas en todo el país. Las empresas multinacionales aseveraron en comunicados internacionales que contaban con el stock suficiente para hacer frente a los requerimientos en el cuadro de la pandemia, pero sin embargo no informan cuál es ese stock. Tampoco el gobierno nacional ha presentado cuáles serían los requerimientos de las diferentes áreas que se encuentran funcionando para abastecer a la población de los requerimientos esenciales. Partiendo de esta base, la habilitación de diferentes ramas de la producción por parte del gobierno no responde a las necesidades de la población, sino a la presión que ejercen los capitalistas. Prueba de esto es la nula reconversión productiva de empresas que pudieran abastecer de insumos sanitarios a los hospitales y trabajadores de la salud de todo el país, quienes denuncian la extrema fragilidad del sistema sanitario nacional.

Llamativamente, es la patronal de Fate la que encabeza la ofensiva contra el salario de los trabajadores y pretende rápidamente poner a producir a todo vapor la planta de San Fernando. El mismo grupo empresario, liderado por Javier Madanes Quintanilla, que obtiene beneficios millonarios por parte del Estado, es quien está imponiendo una rebaja salarial del orden del 50% por quincena a los trabajadores que les toque no producir en Aluar. Esta situación puede darse por el pacto establecido con la burocracia sindical de la UOM, agarrándose del artículo 223 de la ley de Contrato de Trabajo, para acordar con las patro-

nales rebajas salariales. En contraste con la política de la burocracia sindical, el Sutna se planta nuevamente frente a los atropellos patronales. En lugar de presentar el protocolo de seguridad, cómo se soluciona el transporte de los trabajadores resguardando las distancias, cómo resolver la situación de hacinamiento en vestuarios y otras instalaciones de las fábricas, y un plan productivo acorde con las necesidades de la pandemia, las patronales pretenden reducir el salario a los trabajadores que cumplen con la cuarentena. Para tal fin, pretenden basarse del artículo 22 del Convenio Colectivo de Trabajo, que plantea una rebaja del 50% del salario (artículo sin ningún sustento jurídico). Este artículo fue acordado en su momento por la Violeta de Wasiejko, mostrando su carácter profundamente patronal. Las empresas parecen añorar los tiempos de dirección burocrática. La dirección clasista del Sutna rechaza esta maniobra y cuenta para ello con la voluntad masiva de los trabajadores del Neumático.

El viernes se realizará una nueva teleconferencia con la presencia del Ministerio de Trabajo y las patronales. Se cumplirá una semana del anuncio de la nueva etapa de “administración de la cuarentena” por parte del gobierno. La deliberación entre los trabajadores del Neumático es permanente y cuentan con la información que la dirección del Sutna provee sistemáticamente. La producción “esencial” de neumáticos continúa sin comenzar debido a la irresponsabilidad patronal. La lucha planteada por los trabajadores del Neumático es en defensa de todos los puestos de trabajo, el salario y la vida de todos los compañeros.

Juan Pablo Rodríguez



Suscribite a **Prensa Obrera.com**

Gravemos a los capitalistas, de verdad

El proyecto del Frente de Izquierda

Los diputados Romina Del Plá y Nicolás Del Caño presentaron esta semana un proyecto de ley para establecer impuestos progresivos a las grandes fortunas capitalistas. Se trata de uno de los planteos programáticos del Frente de Izquierda más oportunos y necesarios en medio de la crisis social, económica y sanitaria que atravesamos frente a la pandemia.

El propio gobierno ha tenido que tomar el asunto de estos gravámenes como bandera, naturalmente tomando el "título" para devaluar el contenido -al igual que hicieron con nuestro reclamo por la prohibición de despidos y suspensiones, que dio lugar a un decreto no solamente tardío y tremendamente limitado, sino que ni siquiera sirve para los efectos que se propone, ya que la sangría de despidos no cesa.

Más allá del título, la iniciativa que prepara el gobierno -y que buscarían aprobar en el Congreso-, acorde con lo que ha trascendido hasta el momento, a la clase capitalista no le haría ni cosquillas (ver "Impuesto a la riqueza: 'son dos mangos con veinte aunque paguen todos'"). Huelga decir que se viene el lobby imparable por las "exclusiones" -similar al que terminó in-



Imagen de algunos de los empresarios más ricos del país, según la revista Forbes

cluyendo entre las "actividades esenciales" exentas de la cuarentena a las curtiembres o la minería. Según *Infobae* (15/4), el gobierno tiene la "expectativa" de recaudar cerca de unos 3 mil millones de dólares -en la versión más auspiciosa que ha trascendido hasta el momento.

El proyecto del FIT

Nuestro proyecto de impuestos extraordinarios a las grandes rentas y fortunas, por el contrario, se propone adicionar unos 15.000 millones de dólares ante la pandemia. Lo hemos formu-

lado como una medida de emergencia, excepcional, ante las imperiosas necesidades sociales que presenta el cuadro de crisis profunda que vive el país.

Para personas humanas, se establece un piso patrimonial que a diciembre de 2019 supere los 100 millones de pesos, incluyendo las acciones y participaciones societarias, con alícuotas progresivas (contra los casi 200 millones que tomaría de base el gobierno si se calculan los 3 millones de dólares al valor de cambio oficial). Adicionalmente, se establecen impuestos especia-

les y progresivos a las ganancias bancarias, a las altas rentas (beneficios empresariales y rentas de capital), a la gran propiedad de la tierra (a partir de las 5.000 hectáreas) y, finalmente, a las viviendas ociosas. Como se ve, atacamos de conjunto todas las aristas de la ganancia capitalista que amasa fortunas. Lo contrario, es papel pintado.

La tasa progresiva que establecemos se duplicará para todos los activos que no hayan sido declarados en la Afip -es decir, para los evasores fiscales. Mientras los blanqueos de todos los gobiernos (desde Macri hasta Cristina) los han premiado, con esta ley los castigamos.

Finalmente, con lo recaudado se crea un Fondo Especial de Emergencia, bajo control de un comité de trabajadores electos de la Salud, del Instituto Nacional de la Vivienda, de la Afip y técnicos de universidades públicas, destinado a financiar la compra de material sanitario (equipamiento médico y hospitalario, respiradores, etc.) para todos los centros de salud; la compra y producción de alcohol en gel, jabones y mascarillas, para el sistema de salud y toda la población; la contratación de mayor personal de salud y el pago de salarios acordes; el financiamiento de un salario mí-

nimo de cuarentena de 30.000 pesos para todos los trabajadores (registrados y no registrados, de casas particulares, monotributistas) y para el financiamiento de un plan de construcción de 100.000 viviendas populares y urbanización de las villas y asentamientos.

Nuestra ley limita exclusivamente a estos destinos el uso de los fondos y excluye taxativamente que sean dirigidos al pago de la deuda. Denunciamos que el FMI y los acreedores privados, por el contrario, vienen alentando una suba de impuestos de modo tal de asegurarse que van a cobrar y que el país va a cumplir con sus compromisos: una sangría fenomenal del ahorro nacional.

Desde luego, nuestro proyecto se inscribe en un planteo de conjunto ante la pandemia que, además del no pago de la deuda, incorpora la apertura de los libros y cuentas de las empresas, la reconversión industrial para atender masivamente las necesidades de la salud, la centralización urgente de todo el sistema sanitario, la nacionalización de los recursos energéticos y del comercio exterior, y el control obrero y popular sobre todas las medidas.

Juliana Cabrera

Impuesto a la riqueza: "son dos mangos con veinte aunque paguen todos"

Estas fueron las palabras del economista Carlos Melconian lo cual, viniendo de un ex funcionario que revistió en las filas del macrismo, es toda una confesión. A diferencia de algunos representantes de la oposición que han salido a despotricar, el sincericidio del hombre pone las cosas en su lugar.

El comentario de Melconian no tiene nada exagerado. De acuerdo con los trascendidos, el impuesto reportaría unos 3 mil millones de dólares. Es decir, apenas un 0,80% del PBI, una cifra magra comparada con el monto de dólares por una cifra casi similar que se fue en marzo -o sea, en un solo mes-, por el pago de la deuda. Ni hablar con la sangría de los 14.000 millones de dólares que ya pagó por amortización e intereses en ese concepto, desde que asumió Fernández su mandato.

El impuesto, como lo han adelantado algunos medios, alcanzaría a 15.000 personas más acaudaladas y sería del 1 ó 2 por ciento sobre su patrimonio. Esto es un aporte simbólico, si tenemos presente que la

revista *Forbes* viene de publicar un listado de más de una decena de empresarios argentinos cuyo patrimonio supera los 1.000 millones de dólares. Sus fortunas son mayores, pues no todo está declarado y permanecen en paraísos fiscales, a lo que habría que agregar otra franja más cuyo patrimonio está menos al descubierto.

Partiendo de este panorama, salta a la vista que el gravamen termina siendo un fraude, con más razón si tomamos en cuenta que los bienes que se declaran se encuentran subvaluados y, lo más importante, muchos de ellos han sido traspasados a sociedades de modo tal de evadir o disminuir el impacto impositivo. Por otro lado, los bienes que poseen argentinos en el exterior se calculan en 400.000 millones de dólares, de los cuales solo un 25% ha sido blanqueado. La Afip acaba de anunciar que han detectado 2.600 millones de dólares en cuentas no declaradas o con sumas mayores a las declaradas. Esto es apenas la punta del iceberg. Estas inversiones negras obviamen-

te no van a ser afectadas por el nuevo impuesto.

La recaudación del impuesto a los bienes personales venía siendo minúscula, apenas un 0,5 del PBI. Los ingresos fiscales mayoritariamente provienen de impuesto al consumo, empezando por el IVA -es decir, recae sobre el bolsillo popular. El 0,8 del impuesto que se está barajando, sumado al 0,5 anterior, llevaría el total del impuesto al patrimonio al 1,3 por ciento, una distancia abismal con el 8% en concepto de IVA, por el que se recaudan anualmente alrededor de 32.000 millones de dólares -o sea, una relación de 6 a 1. Para el reconocido tributarista César Litvin, se trata de "una medida más política que recaudatoria, por tratarse de un tributo cuya recaudación bruta representó apenas 0,3% del PBI y sólo 0,5% de la recaudación total de impuestos nacionales."

Cortina de humo

El gravamen es apenas una cortina de humo para encubrir la sangría

gigantesca de recursos que se está yendo para pagar la deuda. En lugar de ir a combatir la pandemia, la emisión que está haciendo el Estado nacional viene financiando la fuga de capitales y la corrida hacia el dólar, que es lo que explica el actual salto devaluatorio y rebrote inflacionario (ver artículo "El dólar arriba de los 100 pesos"). La sanción de este impuesto retrucho a la riqueza no va unido a ningún intento por cortar esta hemorragia. En este contexto, el nuevo gravamen, con el pretexto de la pandemia, va a ser un instrumento para juntar recursos para atender los compromisos con los acreedores. No olvidemos que es el propio FMI quien viene alentando el aumento o creación impuestos y abrir paso a un superávit que permita hacer frente a los vencimientos de capital e intereses que el país tiene por delante. Esto también tiene el guiño de los bonistas. El gobierno ha postergado el pago de la deuda en dólares en legislación local (reconociendo el 100% de la misma, sin quita),

pero mantiene el pago de la deuda en pesos y la deuda en dólares bajo ley extranjera.

En medio de esta puesta en escena, no nos debe sorprender que el impuesto "patria" haya terminado deshilachándose. Laderos de izquierda del gobierno, que hoy forman parte de la bancada oficialista, agitaban las aguas planteado no solo de una fuerte imposición al patrimonio personal sino a las rentas, incluidas las ganancias de las empresas. Toda indicaría que este último aspecto ha quedado excluido, con lo cual han quedado fuera del gravamen las ganancias de bancos, mineras y cerealeras, que han amasado superbeneficios y rentas extraordinarias en la última etapa. La redacción final del proyecto ha quedado en manos del titular del Credicoop, Carlos Heller. En manos de un banquero, es la mejor garantía de que del impuesto a la riqueza sólo va a quedar el nombre.

Pablo Heller

El Facebook Live internacional del viernes 10 de abril, "América Latina en tiempos de pandemia, crisis y rebeliones", despertó la atención de un amplio público del continente. Luego de cientos de comentarios, saludos y preguntas en vivo, el video "en diferido" acumuló más de diez mil reproducciones en sus primeras 24 horas online.

Se trató de una iniciativa común de las organizaciones que han suscripto un documento sobre el impacto de la pandemia y de la crisis mundial en Latinoamérica, mientras aún están vivas las rebeliones populares del año pasado.

La transmisión congregó a Sebastián Pezo, de la Fuerza 18 de Octubre de Chile; a Felipe Malacco, compañero brasileño de LPS (Luta Pelo Socialismo); desde Perú, a César Zelada, del grupo Vilcapaza; y a Rafael Santos, por el Partido Obrero. Pablo Giachello, también del Partido Obrero, ofició como coordinador del encuentro.

Los trabajadores latinoamericanos ante la pandemia

En la apertura, Rafael Santos denunció que los capitalistas presionan al gobierno para levantar la cuarentena, a la vez que extorsionan a los trabajadores con reducciones de sueldo y cesantías.

También criticó la falsa prohibición de despidos del gobierno, que convalidó la de los grupos económicos como Techint y habilitó las rebajas salariales. Santos repudió el

despliegue del Ejército y el oscurantismo de las iglesias, utilizado para contener el descontento popular y la represión a los trabajadores, como la ocurrida en el frigorífico Penta, en zona sur.

Sobre la situación en Perú, César Zelada comentó que, a pesar de que la cuarentena fue iniciada tempranamente, su aplicación parcial, sosteniendo la actividad en ramas no esenciales de la economía como la minera y la cervecera, condujo a una catástrofe sanitaria con más de seis mil infectados y cientos de muertos. Se trata de una fuerte advertencia para los trabajadores argentinos frente a la "cuarentena a la carta" anunciada por Alberto Fernández.

Por su parte, Felipe Malacco, de la LPS de Brasil, criticó duramente a Bolsonaro, quien consideró a la pandemia como un "resfriadito". Sin embargo, descartó de plano que cualquier cambio impulsado por el sector más ligado a las Fuerzas Armadas conlleve alguna mejora para los trabajadores. También se refirió a su ciudad, Minas Gerais, donde el gobierno no está abonando los sala-

Exitoso Facebook Live con luchadores de América Latina



rios docentes y amenaza con quitar ayudas sociales. Alertó, además, sobre la situación en las favelas, cuya crisis sanitaria y habitacional se replica en los asentamientos precarios de Argentina y de todo el continente.

Sebastián Pezo, de la Fuerza 18 de Octubre, marcó que, mientras que la burocracia de la CUT (ligada al Partido Comunista) deja pasar los despidos en el cobre, crece la bronca por abajo: está en agenda un congreso nacional de las asambleas y

el movimiento obrero combativo, impulsado por la coordinación del área metropolitana de Santiago. Allí, los compañeros de la fuerza 18 de Octubre colocarán nuevamente el planteo de la huelga general y el fuera Piñera.

Conferencia Latinoamericana: más urgente que nunca

El compañero de Brasil destacó que la crisis actual se produjo sin que el capitalismo se hubiese recuperado

de la de 2008. Se trata de una misma bancarrota. Esto permite comprender la emergencia de gobiernos de derecha, como el de Trump en Estados Unidos o el de Boris Johnson en el Reino Unido, que incrementan la presión imperialista. Rafael Santos añadió que hay un refuerzo de las tendencias bonapartistas y rechazó colocar expectativas en cambios por la vía parlamentaria.

Un comentario del público indagó: ¿es la crisis más importante de la historia? Los panelistas respondieron que "amenaza con serlo". Se basaron para ello en las alarmantes cifras de desempleo (actuales y proyectadas), la tendencia a la depresión global, el incremento de las tendencias belicistas.

Es indispensable una fuerte acción continental de frente único contra la destrucción del salario, las conquistas obreras y la descarga de la crisis sobre los trabajadores; la renovada injerencia imperialista, como el despliegue militar yanqui en las costas venezolanas y la continuidad del bloqueo a Cuba, repudiados durante la transmisión; la crisis sanitaria, que pone en riesgo de vida a millones de trabajadores.

Las organizaciones que participaron del Facebook Live, atestiguando su tenacidad por abrirse paso en la lucha de clases de sus respectivos países -incluso en el complejo contexto de pandemia y cuarentena-, aceptaron ese desafío.

Luciano Arienti

La región de la Lombardía en el norte de Italia, fundamentalmente la provincia de Bérgamo y, aún más específico, Val Seriana (el valle del río Serio), es posiblemente la región del mundo que tiene el más alto porcentaje de muertos por Covid-19.

La zona es de una altísima concentración fabril y en el hospital Pesente Fenaroli de Alzano Lombardo se inició oficialmente el 23 de febrero la epidemia de la zona de Bérgamo, con dos pacientes ingresados que dieron positivo al coronavirus, en una semana los contagiados llegaban a 220 y luego crecieron exponencialmente.

Nembro y Alzano Lombardo son dos de las localidades de Val Seriana que concentraron la mayor cantidad de contagiados (y muertos), y Val Seriana (de conjunto) tiene el triste récord de ser la zona con más muertos por Covid-19 por habitante de Europa; sin embargo, nunca fue declarada zona roja y nunca se llevó a cabo una cuarentena completa.

A medida que las cifras de contagiados crecía a pasos agigantados, los alcaldes de las localidades de Val Seriana y, particularmente los de Nembro y Alzano Lombardo, estaban preparados para proceder a cerrar sus localidades, sin embargo, la orden del gobierno nacional no llegó nunca porque a la par de los contagios creció la presión de los grupos industriales que comenzaron una

Coronavirus: la tragedia de Lombardía y la familia Rocca (Techint)

campana para señalar que, en realidad, la situación en la zona era "normal" -a pesar que en cinco días se habían alcanzado los 110 infectados oficiales en la zona y la epidemia ya estaba fuera de control. "Tenemos que bajar el tono, hacer entender a la opinión pública que la situación se está normalizando, que la gente puede volver a vivir como antes", dijo el presidente de Confindustria Lombardía, Marco Bonometti, en los medios, sosteniendo que "el riesgo de infección es bajo". Esta posición criminal de los capitalistas fue avalada por todas las fuerzas políticas, desde el alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, del Partido Democrático (un partido de centroizquierda), hasta el propio primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, quien el 8 de marzo -cuando los contagios oficiales en la Bergamasca habían pasado, en una semana, de 220 a 997-, en una confusa rueda de prensa a través de Facebook anunció un decreto por el que se restringían las entradas y salidas de los municipios, pero todo el mundo podía seguir yendo al trabajo. Cuando un par de días después el confinamiento se extendió a toda Italia por igual, en la zona de la Bergamasca



Camiones militares transportan cadáveres de víctimas del Covid-19

nada cambió, mientras los contagios crecían y crecían las fábricas seguían funcionando a toda máquina.

La intervención de los sindicatos obligó a tomar más medidas, poniendo límites que las empresas violaron tratando de buscar, a través de subterfugios, una vía para seguir trabajando, declarando que su actividad de alguna manera debía ser calificada como esencial, una suerte de "autocertificación"; la presión de los trabajadores que comenzaron huelgas en varias empresas obligó a que el gobierno pusiera más límites. Con todo, quedaron puntos ambiguos y muchas fábricas continuaron prácticamente todas abiertas, sin la debida distancia de seguridad ni el material adecuado, hasta el 23 de marzo, cuando los contagios oficiales en la zona ya eran casi

6.500. Una semana después y a pesar del decreto de cierre de "todas las actividades productivas no esenciales", había 1.800 fábricas abiertas y 8.670 infectados oficiales en la zona.

Techint, siempre Techint: desde tubos a la salud privada

Una de las empresas que siguió funcionando en la zona de Bérgamo es Tenaris, del grupo Rocca, que emplea 1.700 trabajadores. La producción de Tenaris no es esencial, sin embargo, siguió trabajando con el aval de los gobiernos, como sucede en nuestro país con la planta de Siderca, donde incluso cuenta con el aval de los intendentes de la zona y las autoridades nacionales y provinciales. Son los mismos capitales de la Techint que despidió 1.500 trabajadores de la construcción,

que el propio gobierno de Fernández homologó.

Tenaris en Italia está dirigida por Gianfelice Rocca, quien, a su vez, es presidente de Humanitas. Humanitas es socia con el grupo San Donato de las dos clínicas privadas más importantes de la zona, que facturan más de 15 millones de euros anuales cada una. Tenaris los enferma, Rocca los atiende y factura con la enfermedad, un combo macabro.

"Es el capitalismo, estúpido"

La tragedia sanitaria en la Lombardía tiene explicaciones. Una de ellas es la decisión de impedir una cuarentena que frene el contagio y sostener todas las condiciones de trabajo que facilitaban la propagación del virus. El otro aspecto clave es la destrucción de la salud pública en función de los negocios de la salud privada.

El límite lo puso la clase obrera, que actuó a pesar de la complicidad de la burocracia sindical y de los partidos de todos los signos políticos que avalaron las decisiones criminales de los capitalistas.

Pero Bérgamo es solo la expresión más descarnada de un fenómeno mundial. En nuestro país, la presión capitalista está horadando la cuarentena. Los responsables son los mismos.

Eduardo Salas

Dos grandes escollos en la lucha mundial contra la pandemia

Salud privatizada y ajustes

La pandemia ha puesto de relieve la vulnerabilidad del sistema de salud de Estados Unidos, que, como es sabido, ha pasado a convertirse en el epicentro de la propagación del virus. La medicina norteamericana es abrumadoramente privada. La red pública es marginal. Esta estructura de la salud ha sido un factor gravitante para explicar las dificultades y carencias de dicho país para enfrentar el brote.

El sector privado dominante ha reducido los servicios para aumentar las ganancias. Según la Asociación Estadounidense de Hospitales, el número de camas de hospitales disminuyó un extraordinario 39% entre 1981 y 1999. Este recorte se prolongó hasta nuestros días. El objetivo era aumentar las utilidades mejorando la proporción de camas ocupadas. Los sanatorios son organizados a imagen y semejanza de una empresa capitalista y lo que prima es la rentabilidad y no las necesidades y previsiones en materia médica y sanitaria. El afán por achicar los inventarios, de modo de reducir el costo que representa un capital inmovilizado que reina en el mundo de los negocios y que está incorporado como máxima en las corporaciones modernas (*just in time*), ha sido trasladado al campo de la salud. El principio reinante fue disponer exclusivamente de lo imprescindible en lo que se refiere a insumos, camas e infraestructura de modo de minimizar costos al máximo. Bajo esta premisa, el estándar considerado ideal era tener el 90% de las camas ocupadas. Pero bajo este criterio, los centros de salud ya no tenían la capacidad de absorber la afluencia de pacientes durante epidemias y emergencias médicas.

Como resultado, solo hay 45.000 camas de UCI (terapia intensiva) disponibles para lidiar con la inundación proyectada de casos graves y críticos de coronavirus. En comparación, los surcoreanos tienen tres veces más camas disponibles por cada mil personas que los estadounidenses. Según una investigación de *USA Today*, "solo ocho estados tendrían suficientes camas de hospital para tratar a un millón de estadounidenses de 60 años o más que podrían enfermar con Covid-19".

Entretanto, la red pública de salud local y estatal tiene un 25% menos de personal hoy que en la crisis financiera de 2008 y sus presupuestos se han reducido un 10% en términos reales.



Trump también cerró, en 2018, la Oficina de Pandemias de la Casa Blanca, un departamento creado por Obama después del brote de ébola de 2014, para garantizar una respuesta nacional rápida y bien coordinada a las nuevas epidemias. La Casa Blanca asegura que sus labores fueron reasignadas a otros departamentos, pero el desmantelamiento estuvo acompañado por la salida de especialistas. Un mes antes de su disolución, el director del Consejo Nacional de Seguridad, John Bolton, despidió al subdirector a cargo de la respuesta a posibles epidemias, el almirante Timothy Ziemer, que no fue sustituido.

Un capítulo especial son los geriátricos, que también mayoritariamente funcionan bajo la órbita privada. La rentabilidad que tiene una parte importante de esas instituciones se basa en la precariedad de su atención y en el pobre nivel de sus servicios que se sustenta en salarios bajos, falta de personal y reducción ilegal de costes. Decenas de miles de personas mueren cada año por la negligencia de los centros de atención para atender como corresponde las patologías y enfermedades de sus residentes, y por el fracaso de los gobiernos en hacer responsable a la administración de los centros. Muchos de estos geriátricos encuentran más barato pagar las multas por violaciones sanitarias

que contratar personal adicional y formarlo adecuadamente. Aparte, y fundamental, los bajos salarios que se les paga a los trabajadores de los geriátricos, hacen que estos tengan más de un trabajo: salen de una institución para entrar a trabajar en otra similar, con horario completo o parcial. Ellos mismos trasladan el virus de un geriátrico a otro, rompiendo toda cuarentena. Bajo estas condiciones, los hogares y residencias para ancianos se han convertido en un foco explosivo de propagación del virus y en particular de la mortalidad, pues afecta a la población de mayor riesgo.

Además está la gran industria farmacéutica, que realiza poca investigación y desarrollo de nuevos antibióticos y antivirales. De las 18 compañías farmacéuticas más grandes de Estados Unidos, 15 han abandonado totalmente el campo. Los medicamentos cardiológicos, los psicofármacos y los tratamientos para la impotencia masculina son los que generan mayores beneficios, no los tratamientos contra las infecciones hospitalarias y de alcance más generalizado. Una vacuna universal contra la gripe -es decir, una vacuna que se dirige contra las partes inmutables de las proteínas de la superficie del virus- ha sido posible desde hace décadas, pero nunca se consideró lo suficientemente rentable como para ser una prioridad.

Dichas pandemias han sido pronosticadas con anticipación por los epidemiólogos, pero no se hizo nada porque eso no era lucrativo o para ahorrar recursos en medio de los planes de austeridad puestos en marcha por los gobiernos capitalistas de turno.

Europa

En los últimos treinta años, los sistemas de salud pública en Europa, a su turno, han sido diezmos y privatizados, y eso está en la base del desborde sanitario que enfrentan para hacer frente al brote.

El gasto público en salud en Alemania es superior a los 3.800 euros per cápita, mientras en Italia es de 1.900 y en España de 1.600 (año 2018, *Datosmacro.com*), esto se refleja en la menor cantidad de muertes durante la pandemia (2.000 fallecidos, contra 19.700 de Italia y 16 mil de España). Alemania dispone de 28 mil camas de terapia intensiva y 25 mil respiradores, y testea masivamente a la población para detectar los casos asintomáticos. Un modelo parecido al que se aplicó exitosamente en Corea del Sur, lo cual contrasta con otras potencias europeas que han escatimado recursos en la materia.

Un caso, por cierto, emblemático es el de Gran Bretaña, donde se constata escasez de personal y unidades de terapia intensiva.

Fundado después de la Segunda Guerra Mundial, el Sistema Nacional de Salud de Gran Bretaña (NHS) se financia con el dinero de los contribuyentes y es de acceso gratuito para todo el país, que históricamente ha sido materia de orgullo para su población. Pero el NHS está resentido, tras años de austeridad presupuestaria y achicamiento del Estado por parte de gobiernos del Partido Laborista y del Partido Conservador. Actualmente, enfrenta una escasez de alrededor de 100.000 trabajadores de la salud, personal médico y de enfermería. Antes del coronavirus, los hospitales ya funcionaban al 90% de su capacidad. La tendencia en el ámbito público fue aplicar los mismos criterios de rendimiento de matriz comercial que describimos en la medicina privada de Estados Unidos y sus resultados funestos están a la vista.

La política de austeridad se ha hecho sentir en toda Europa y uno de sus blancos principales ha sido Italia, que es probablemente una de las claves que explica las dramáticas dificultades para hacer frente a la pandemia. En los últimos cuatro años, los diferentes gobiernos de turno redujeron en 37.000 millones de euros el presupuesto destinado a salud.

Límites insalvables

Lo expuesto hasta aquí es suficiente para ver los límites insalvables de los Estados capitalistas para hacer frente al virus. Los recursos fundamentales, aún en plena pandemia, hoy están reservados para el rescate del capital y no para enfrentar la catástrofe sanitaria y social. La privatización de la salud, que tiene en el modelo yanqui una de sus expresiones más emblemáticas, socava las condiciones para una batalla en regla contra este flagelo. La organización capitalista de la salud bajo el principio del lucro es incompatible con la vida y salud de la población. Esto requiere la centralización de todos los recursos de la salud, tanto pública como privada, en manos del Estado, de modo de establecer una planificación y un uso racional de los mismos a la altura de las necesidades, lo que debe ser acompañado por un reforzamiento de las partidas destinadas a esa área. Es decir, el camino y orientación opuesta a la que hoy vienen llevando adelante los Estados capitalistas.

Pablo Heller